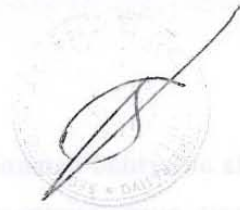


**309-2006**



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CERTIFICA; que en el proceso contencioso administrativo promovido por el Licenciado Luis Alfonso Valle Deras, como Apoderado de la **Sociedad COMMERCE GROUP CORP. contra el MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**, se encuentra la sentencia definitiva que literalmente DICE:

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once horas del dieciocho de marzo de dos mil diez.

El presente juicio ha sido promovido por la sociedad Commerce Group Corporation, por medio de su apoderado general judicial, licenciado Luis Alfonso Valle Deras, impugnando de ilegal:

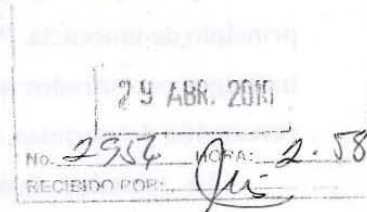
Resolución MARN 3249-779-2006 de fecha cinco de julio de dos mil seis, notificada el trece de septiembre del mismo año, en la cual se revocó la Resolución MARN-No 474-2002 de fecha quince de octubre del año dos mil dos. La Resolución MARN-No 474-2002 otorgó permiso ambiental a Commerce Group Corporation, para desarrollar el proyecto Commerce Group Corporation Planta San Cristóbal.

Ha intervenido en el juicio: la parte actora en los términos señalados, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales como autoridad demandada y el licenciado Oscar Jerónimo Ventura Blanco, en calidad de delegado y en representación del Fiscal General de la República.

**I. CONSIDERANDOS**

**A. ANTECEDENTES DE HECHOS.**

**ALEGATOS DE LAS PARTES**



**1. DEMANDA.**

**a) Autoridad demandada y acto impugnado.**

La sociedad Commerce Group Corp., dirige su pretensión contra el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales por considerar ilegal el acto descrito en el preámbulo de esta sentencia.

**b) Circunstancias:**

Manifiesta la parte demandante, que el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales revocó el permiso ambiental MARN No 474-2002, sin seguir los lineamientos y principios legales correspondientes según artículos 12 de la Constitución; 88 y 93 de la Ley del Medio Ambiente.

La actora manifiesta que el tres de noviembre de dos mil cinco, presentó escrito ante la Administración Ambiental solicitando auditoría ambiental para rendir nueva fianza, tal y como lo prescribe la legislación ambiental (Artículo 35 del Reglamento de la Ley del Medio Ambiente). Continúa la actora que al no emitir

la autoridad demandada respuesta, presentó el treinta y uno de mayo de dos mil seis, nuevo escrito solicitando nuevamente la práctica de la auditoría ambiental.

Según la demandante, la auditoría ambiental fue practicada el veintitrés de junio de dos mil seis, ocho meses después de la primera solicitud hecha, además considera que la auditoría fue practicada sin tomar en cuenta los lineamientos legales pertinentes.

La actora expresa que el cuatro de septiembre de dos mil seis, se hizo nueva petición para rendir fianza haciendo referencia en dicho escrito que no habían iniciado operaciones; sin embargo, se habían tomado las medidas correspondientes para preservar el medio ambiente.

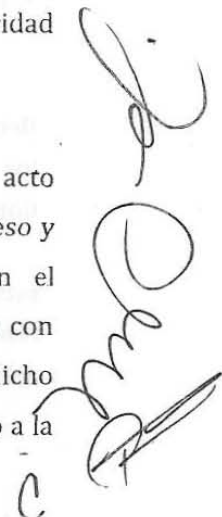
De acuerdo a lo establecido en la demanda, el trece de septiembre de dos mil seis, se recibió acto administrativo de fecha cinco de julio del mismo año, en el cual se resolvió: Revocar el permiso ambiental 474-2002.

La demandante considera que dicha resolución carece de un verdadero fundamento legal, puesto que la revocación únicamente puede producirse al incurrir en los supuestos pronunciados en el artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente; lo cual no pudo haber ocurrido, pues según explica, la empresa no se encontraba funcionando, valiéndose para ello de lo establecido por el auditor en el acta. Además, la actora estima que en el acta no se determinaron los daños ambientales que supuestamente se cometieron, sancionándose en contra del principio de inocencia. Por estas razones, la sociedad demandante defiende que los hallazgos encontrados por la autoridad ambiental y por los cuales se recomendó la revocación del permiso, no pudieron ser.

La sociedad Commerce Group Corporation, considera que la sanción impuesta no fue precedida por el procedimiento sancionatorio establecido en la Ley del Medio Ambiente, violentando por lo tanto los principios del debido proceso y su derecho de audiencia. Observa la actora que dentro de esa resolución se mandó cerrar las operaciones de la empresa, competencia que únicamente le corresponde al Ministerio de Economía, actuando por lo tanto, la autoridad demandada con exceso de autoridad.

### **c) Argumentos jurídicos de la pretensión**

La pretensión de la parte actora se fundamenta en que en el acto administrativo, objeto del litigio incumplió con las garantías del debido proceso y principio de legalidad, puesto que la Administración no cumplió con el procedimiento sancionatorio irrespetando su derecho de audiencia y actuó con exceso de autoridad al revocar el permiso ambiental, además observa que dicho acto no está contemplado como sanción en la legislación ambiental. En cuanto a la

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'J. O. ...' and the initials are 'J. O.'.



orden de cierre de la empresa la sociedad demandante considera que la Autoridad ambiental actuó con exceso de autoridad.

#### d. Petición

La sociedad demandante pide se declare la ilegalidad del acto impugnado.

### **2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.**

Se tuvo por parte a la sociedad Commerce Group Corp., por medio de su apoderado general judicial licenciado Luis Alfonso Valle Deras. La parte actora solicitó en la demanda se suspendiera el acto administrativo; sin embargo, por existir de parte de la sociedad salvadoreña un interés difuso en proteger el medio ambiente, se declaró dicha petición no ha lugar. Seguidamente se pidió informe a la autoridad demandada sobre la existencia del acto atribuido.

Al contestar este informe, la autoridad manifestó que no eran ciertos los hechos vertidos por la sociedad actora en la demanda. Se tuvo por parte al señor Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; se tuvo por recibido el expediente administrativo; se le solicitó el informe referido en el art. 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se ordenó notificar la existencia de este proceso al Fiscal General de la República.

### **3. INFORME DE LA PARTE DEMANDADA.**

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó el informe de quince días de manera extemporánea razón por la cual se mandó a oír a la autoridad y al no justificar la extemporaneidad se le impuso multa de la forma relacionada en auto de las diez horas veinte minutos del ocho de mayo de dos mil ocho.

### **4. TÉRMINO DE PRUEBA.**

Se le dió intervención al licenciado Oscar Jerónimo Ventura Blanco en su calidad de agente auxiliar delegado por el Fiscal General de la República y se abrió el juicio a prueba por el término legal. En dicho término tanto la sociedad Commerce Group Corp., por medio de su apoderado judicial, como el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, agregan escrito y además el Ministro agrega copia certificada del permiso ambiental MARN No 474/2002.

### **5. TRASLADOS**

Se corrieron los traslados que ordena el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Sobre los alegatos presentados se tuvo el siguiente resultado:

a) La demandante retoma lo establecido en la demanda insistiendo sobre: el no funcionamiento del proyecto de lo cual se deja constancia en el acta de la auditoría; el que no se justificó la retardación de justicia a las solicitudes que en su debido tiempo le fueron realizadas a la Autoridad, y la falta de acatamiento al procedimiento sancionatorio.

Junto al escrito de traslado, la parte actora anexa constancia extendida por el Subdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Economía.

b) La autoridad presentó sus alegatos en tiempo exponiendo: Que el permiso ambiental MARN-No 474/2002, Commerce Group Corporation Planta San Cristóbal, debía de dar estricto cumplimiento a las medidas ambientales sujetas a garantías como las establecidas por el Programa de Manejo Ambiental contenido en el Diagnóstico Ambiental. Además explica, que las auditorías ambientales son el mecanismo de evaluación y verificación del cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el permiso, así como delimitar y definir las obligaciones que el titular debe de llevar a cabo con relación al permiso ambiental, tomando en consideración elementos que no estuvieron presentes al momento de la evaluación ambiental, así como otros que el titular pretenda introducir en el proyecto.

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales manifestó que aparte de la labor de seguimiento por medio de las auditorías ambientales, se dieron seguimiento a las condiciones del proyecto mediante evaluaciones efectuadas por la Dirección General de Gestión Ambiental, según consta en el Dictamen Técnico de no cumplimiento de Medidas Ambientales de fecha veintinueve de junio de dos mil seis. Asimismo, manifiesta que la resolución MARN-No3249-779-2006, en especial el inciso X se fundamenta en el principio de precaución o Evitación prudente.

c) El representante del Fiscal General de la República considera que la resolución proveída por la autoridad demandada MARN No 3249-779-2006, fue pronunciada de acuerdo con la Ley del Medio Ambiente y su respectivo reglamento, motivada por el principio precautorio; las auditorías practicadas el veintitrés de junio de dos mil seis y el dictamen técnico de no cumplimiento de las medidas ambientales emitido por la Dirección General de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las cuales determinan que no se cumplió con las medidas ambientales 4, 5 y 6 establecidas en el permiso ambiental MARN 474-2002.

## **B. FUNDAMENTOS DE DERECHO.**



## **1. OBJETO Y LIMITES DE LA PRETENSIÓN.**

Conforme al art. 32 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la sentencia que dilucidará el presente conflicto, recaerá únicamente sobre los puntos controvertidos en relación con el acto administrativo impugnado.

De lo establecido en la demanda, la sociedad Commerce Group Corporation pretende se declare ilegal:

Resolución MARN 3249-779-2006 de fecha cinco de julio de dos mil seis, notificada el trece de septiembre del mismo año: en la cual se revocó la Resolución MARN-No 474-2002 de fecha quince de octubre del año dos mil dos. La Resolución MARN-No 474-2002 otorgó permiso ambiental a Commerce Group Corporation, para desarrollar el proyecto Commerce Group Corporation Planta San Cristóbal que consistía en la actividad de obtención de oro, a partir de material aurífero procedente de la Mina San Sebastián, proyecto ubicado en caserío Loma Larga, 3 kilómetros al noroeste de El Divisadero, departamento de Morazán.

Las razones expuestas por la actora son por considerar que el acto administrativo que revocó el permiso ambiental MARN-No 474-2002, fue pronunciado sin acatar el debido proceso sancionatorio establecido en la Ley del Medio Ambiente, coligiendo de ello violación a la presunción de inocencia; derecho de audiencia y a la vez mediante dicho acto el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales actuó con exceso de autoridad al ordenar el cierre del proyecto.

## **2. SOBRE LO OCURRIDO EN SEDE ADMINISTRATIVA.**

La autoridad administrativa ambiental pronunció acto administrativo, por considerar que la omisión de la sociedad Commerce Group Corporation casaba dentro del tipo establecido en el artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente; en base a ello, se ha tenido a la vista el expediente administrativo del cual se desprende que los hechos se desarrollaron de la forma siguiente:

a) El quince de octubre de dos mil dos, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otorgó permiso ambiental Resolución MARN-No 474-2002, a la sociedad Commerce Group Corporation, como titular del proyecto Commerce Group Corporation Planta San Cristóbal, que consistía en la actividad de obtención de oro a partir de material aurífero procedente de la Mina San Sebastián, proyecto ubicado en caserío Loma Larga, 3 kilómetros al noroeste de El Divisadero, departamento de Morazán.

La fianza presentada por el titular del proyecto para obtener el permiso fue por un plazo de tres años.

b) A las trece horas del veintitrés de junio de dos mil seis, se procedió a realizar auditoría ambiental en el sitio donde se desarrolla el proyecto Commerce Group Corporation, dicho acto consta a folio 17 y 18 del juicio; y folio 25 y 26 del expediente administrativo.

c) El veintisiete de junio de dos mil seis, el auditor responsable de la auditoría ambiental emitió informe de la auditoría ambiental practicada, el cual consta a folio 15 y 16 del juicio y 23 y 24 del expediente administrativo.

d) El veintinueve de junio de dos mil seis, la Dirección General de Gestión Ambiental, pronunció dictamen técnico sobre la auditoría practicada el veintitrés de dicho mes y año, documento que se encuentra agregado de folios 10 a 14 del juicio y 28 a 33 del expediente administrativo.

e) El cinco de julio de dos mil seis, la autoridad ambiental pronunció acto administrativo en el cual se revoca la resolución MARN No 474-2002; ordena a la demandante presentar el plan de cierre de operaciones; libera la fianza de cumplimiento ambiental y ordena se cumplan con las obligaciones establecidas en el numeral dos.

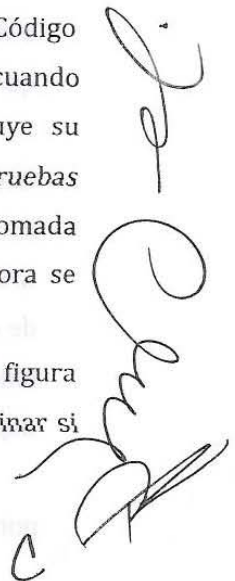
### 3. ANALISIS DEL CASO.

Como se estableció en su oportunidad, la sociedad Commerce Group Corporation aportó como prueba documental, las actas e informes de folios siete a treinta y tres que acompañaron la demanda, y copia de constancia extendida el treinta de enero de dos mil ocho por el Subdirector de Hidrocarburos en los términos establecidos en la razón suscrita por el Secretario de esta Sala.

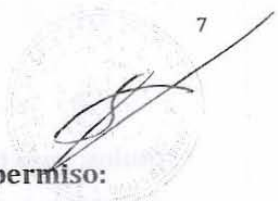
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aportó como prueba certificación del Permiso Ambiental 474-2002 y además como elemento formal del acto administrativo presentó el expediente administrativo.

Ambos medios probatorios serán analizados bajo el artículo 265 del Código de Procedimientos Civiles, el cual estima como reconocido un documento cuando éste es presentado dentro del juicio y agregado éste, no se redarguye su legitimidad. Tanto la parte actora como demandada no repudiaron las pruebas agregadas en tiempo, por lo tanto la valoración de cada una de ellas será tomada en cuenta para determinar si las razones por las cuales pretende la actora se declare ilegal el acto proceden.

Como primer punto a analizar, esta Sala estima oportuno estudiar la figura de la revocatoria de permisos y el proceso sancionatorio, para así determinar si esta figura fue aplicada debidamente.







**a) Sobre el debido proceso sancionatorio y la revocatoria de permiso:**

La sociedad Commerce Group Corp., manifiesta en la demanda: *“Ante esta situación, se considera violentado el principio constitucional de audiencia y al debido proceso, emitiendo una resolución sin más trámites, ni diligencias sobre los hechos y cuestiones jurídicas que se controvierten, mucho menos se hace mención en ésta, de los argumentos principales de mi poderdante, lo cual evidencia que en ningún momento se le concedió el derecho de audiencia, que aún la misma ley del Medio Ambiente, lo establecen su Art. 93 li. d)”*.

Para determinar la existencia del cumplimiento del debido proceso, esta Sala considera necesario abordar, como primer punto, qué proceso se debió aplicar para así corroborar si existe o no una violación al mismo; para lo cual es importante, primero determinar la naturaleza de la figura de la Revocación prescrita en nuestra legislación medio ambiental.

Revocar es: *“Dejar sin efecto una declaración de voluntad o un acto jurídico en que unilateralmente se tenga potestad... y otros en que lo admita la ley o lo estipulen las partes”* (Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales; Ossorio, Manuel). Como bien observa la actora en la misma demanda, la Ley del Medio Ambiente regula en el Título XIII, Capítulo I, el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, el cual no contempla como sanción la figura de la revocatoria, por el simple hecho que esta no es una verdadera sanción, a lo mucho puede ser consecuencia de una sanción.

La revocatoria de un permiso ambiental que ha sido legalmente concedido, es el resultado del incumplimiento de las condiciones o requisitos que dicta el mismo. En otras palabras, es por la inobservancia del titular respecto a las condiciones y requisitos que hacen valedero el permiso, que deviene su ineficacia. La revocatoria *“resulta precisamente porque esas condiciones han variado, de forma voluntaria por el particular, a raíz del incumplimiento en el que el mismo incurre”* (Fortes Martín, Antonio: “Estudio sobre la Revocación de los Actos Administrativos” Revista de Derecho, Valdivia, Vol. XIX No 1, julio 2006, pp 149-177).

La facultad de revocar un permiso surge de la ya conocida trilogía de la Administración Pública: actividad policía; servicio público o prestación de servicios y actividad de fomento o promoción. La actividad policía es aquella que crea la potestad autorizatoria en la Administración para controlar y vigilar todas aquellas actividades privadas dentro de los criterios y márgenes de la ley. Esta potestad faculta, entre otras, a que la Administración otorgue permisos, licencias o

títulos; pero también, permite que la Administración pueda anularlos o revocarlos, siempre bajo los parámetros que la misma ley determine.

En relación a las autorizaciones, en sentencia 65-H-98, de las catorce horas con catorce minutos del día treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, esta Sala expuso: " *En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la técnica autorizatoria constituye una forma de limitación de la esfera jurídica de los particulares; y ello en el sentido de que, el legislador veda a éstos el ejercicio de determinadas actividades, que sólo pueden llevarse a cabo, previa intervención de la Administración Pública, encaminada a constatar el cumplimiento de las condiciones previstas por el ordenamiento, al efecto. Sobra decir que el legislador, mediante esta técnica, persigue algún fin de carácter público: recurre a ella para proteger determinados intereses colectivos, según la naturaleza de las actividades de que se trate.*

*Es así como la potestad de conceder autorizaciones, lleva imbibida la posibilidad de que la Administración Pública impida el ejercicio de las actividades reguladas, en los casos en que no exista la autorización debida, y, en general, en todos aquellos en que esas actividades se ejerciten al margen de los lineamientos definidos por el ordenamiento. De lo contrario, no se alcanzaría el fin que persigue la norma que instituye las autorizaciones en cada caso."*

Otto Mayer en su obra "Derecho Administrativo Alemán"; Tomo II, explica que la revocación no es libre en los siguientes casos: a) cuando ha sido otorgado por una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada y b) cuando la ley lo prohíbe. Según el autor alemán, esto sucede sobre todo cuando la ley indica los motivos especiales en los cuales una revocación está autorizada. En estos casos la ley limita el poder discrecional de la Administración y circunscribe su voluntad a lo que ella establece.

El Artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente, limita la voluntad del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales a dos únicas razones: a) La negativa del titular del permiso ambiental a cumplir las condiciones establecidas en éste, y b) La violación de las normas técnicas de calidad ambiental y las de aprovechamiento racional y sostenible del recurso. Esto quiere decir que el Ministro únicamente puede revocar un permiso ambiental legalmente otorgado si el titular del proyecto incurre en los tipos establecidos.

Señalado lo anterior, es evidente que la legislación ambiental no contempla como una sanción la revocatoria por el simple hecho que esta es consecuencia de la potestad de policía del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de proteger, vigilar y controlar el medio ambiente, por lo tanto el proceso

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'C. P.' followed by a stylized flourish.



sancionatorio regulado dentro de la normativa ambiental no era aplicable al caso en particular.

**b) Respecto a la garantía de defensa y derecho de audiencia.**

Idea manejada por autores, como Sala Arquer, sobre el objetivo de la revocatoria, determinan que el objetivo de ésta es el de retirar del Ordenamiento Jurídico un acto administrativo existente por considerar que éste daña el interés público (Vid. Sala Arquer, J.M.: *“La Revocación de los Actos Administrativos en el Derecho Español.”*; pp. 183 y 184.); la intención de la revocación, es proteger el bien común, para el caso en particular el del medio ambiente.

Sin embargo, debido al efecto de la revocatoria, la Ley necesita asegurar que la facultad revocatoria de la Administración no incurra en excesos que atenten contra la seguridad jurídica del particular y así no destruir la confianza que se puede tener en el sistema jurídico Salvadoreño. Razón por la cual, la Constitución reconoce la aplicación del debido proceso cuando existe el peligro de perjudicar la esfera jurídica de un individuo.

Entre los principios que tutelan el debido proceso se encuentra el principio de igualdad de las partes dentro del proceso, el cual garantiza una bilateralidad y contradicción en el litigio, esto es, que el proceso se desarrolle, bajo la dirección del juez, entre las dos partes, con idénticas condiciones, para ser oídas y así poder conocer los argumentos de ambas partes (Véscovi, Enrique: *“Teoría General del Proceso”*; página 54, numeral 4).

La Ley del Medio Ambiente de El Salvador, si bien es cierto establece las razones por las cuales el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales puede revocar un permiso (artículo 64 de la Ley del Medio Ambiente), no establece el proceso legal que debe ser aplicado; empero, toda actuación de una autoridad debe de ser a la luz de la Ley y de la Constitución: el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Ambientales debe y tiene que aplicar los principios mínimos del debido proceso. Es necesario que el proceso administrativo tenga como mínimas garantías: una debida comunicación de los hechos que se investigan; un plazo razonable para que el administrado pueda defenderse; plazo de prueba en el cual las presentadas se comunican al adversario; iguales oportunidades de exponer sus alegatos.

Al analizar el acto administrativo MARN 3249-779-2006 que impugna la actora, se observa que la Autoridad Ambiental, revocó el permiso debido a que la actora incumplió: a) con las medidas ambientales establecidas en el Programa de Adecuación Ambiental; b) incumplió con Programa de Monitoreo Ambiental y c)

las medidas ambientales de cumplimiento obligatorio, todas las anteriores contempladas dentro del permiso.

Según el acta del veintitrés de junio de dos mil seis, la auditoría de evaluación ambiental fue practicada con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley del Medio Ambiente ya relacionado (reunión inicial; verificación del cumplimiento y seguimiento de las medidas ambientales propuestas del permiso ambiental y la reunión de cierre con el auditado). Dentro de la reunión inicial, se explicó el objetivo de la resolución, una vez concluida la auditoría se le comunicó al auditado los hallazgos de ésta y se le hizo del conocimiento a este por medio del ingeniero representante del proyecto. Se levantó acta, se hizo constar la entrega de ésta al representante y se comunicó en la misma el plazo de ocho días hábiles para que el titular presentara documentación y aclarara, permitiéndole así impugnar el pronunciamiento del auditor.

El artículo 37 del Reglamento de la Ley del Medio Ambiente, contempla como parte del procedimiento de la auditoría ambiental la elaboración del dictamen técnico de no cumplimiento. En este Dictamen, se determinó que las medidas establecidas en el permiso MARN 474-2002 no habían sido ejecutadas, por lo que se recomendaba la revocación del permiso, tal y como se establece en el romano IV del mismo.

El acta de auditoría ambiental, fue el medio de comunicación por parte de la autoridad administrativa sobre el hecho investigado; el comunicado hecho en el acta para contradecir los hallazgos y los ocho días de prueba, garantizaron el derecho de defensa de la demandante.

Dentro de este período de ocho días hábiles que se comunicó a la parte actora, ésta no hizo uso en su debido tiempo de su derecho de defensa, prueba de ello es el escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil seis por la actora, el cual corre agregado a folio 25 a 32 del proceso contencioso administrativo, y folio 85 y 88 del expediente administrativo, dos meses después de pronunciado el acto administrativo que la misma impugna.

Establecido lo anterior queda probado, que las garantías del debido proceso de la sociedad demandante Commerce Group Corp., fueron respetadas.

**c) Sobre el exceso de autoridad: Incumplimiento con el principio de legalidad.**

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'C. G.' and the initials below it are 'C. G.'.



Respecto al plan de cierre de operaciones y rehabilitación, dicho plan es parte del programa de manejo ambiental (Artículo 24 del Reglamento de la Ley del Medio Ambiente) el cual integra el estudio de impacto ambiental.

La Ley del Medio Ambiente en el artículo 21, establece que toda actividad, construcción o proyecto que puede tener impactos considerables o irreversibles en el ambiente salud y bienestar humano o del ecosistema, requieren por mandato de ley un estudio de impacto ambiental. Las actividades de minería se encuentran dentro de este listado.

Según la Ley del Medio Ambiente, el permiso ambiental obliga al titular a realizar todas las acciones de prevención, atenuación o compensación, establecidos en el Programa de Manejo Ambiental (Artículo 20 de la Ley del Medio Ambiente); este Programa es el resultado de los principios ambientales reconocidos por nuestra legislación: principio de prevención, precautorio (artículo 2 literal e) de la Ley del Medio Ambiente) y principio del que contamina paga (artículo 85 de la Ley del Medio Ambiente). Dentro del Programa de Manejo Ambiental se encuentra contemplado el plan de cierre y operaciones.

Según la Ley del Medio Ambiente, el permiso ambiental obliga al titular a realizar todas las acciones de prevención, atenuación o compensación, establecidos en el Programa de Manejo Ambiental (Artículo 20 de la Ley del Medio Ambiente); por lo tanto al revocarse este por incumplir con los requisitos que le dan razón de ser al permiso, el plan de cierre y operaciones es parte del proceso de rehabilitación y compensación que la actividad de minería produce.

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cumplió con los principios del debido proceso, previo a la revocatoria del permiso ambiental MARN No 474-2002, al respetar el derecho de audiencia y defensa del administrado. A la vez, la Autoridad demandada en cumplimiento al principio de legalidad, hizo bien en solicitar el plan de cierre de operaciones y rehabilitación, tal y como exige la Ley del Medio Ambiente.

Por estos motivos esta Sala es de la opinión que el acto administrativo MARN 3249-779-2006 pronunciado el cinco de julio de dos mil seis por el Ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es legal.

**II. FALLO**

POR TANTO, con fundamento en lo expuesto y artículos 64 literal a) de la Ley del Medio Ambiente; artículos 421 y 427 del Código de Procedimientos Civiles; 31, 32 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a nombre de la República, esta Sala **FALLA:**

a) Declárase legal el acto MARN-No3249-779-2006, pronunciado por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales el cinco de julio de dos mil seis.

b) Condénase en costas a la sociedad Commerce Group Corporation conforme a Derecho.

c) En el acto de notificación, entréguese certificación de esta sentencia a las partes y a la representación fiscal.

d) Oportunamente, devuélvase el expediente administrativo a su oficina de origen.

Notifíquese. ~~Emendado: quince~~ Vale.-

"M. POSADA". ----- "L.C.DE AYALA G." -----  
"M.A.CARDOZA A." ----- "E.R.NÚÑEZ".-----  
PRONUNCIADA POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS Y LOS SEÑORES  
MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN. ----- "ILEGIBLE".-----  
----- SECRETARIO. -----

ES CONFORME CON SU ORIGINAL con la cual se confrontó y para entregar al **MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**, se extiende firma y sella la presente **CERTIFICACIÓN**, constando de seis folios útiles, en la Secretaría de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; San Salvador, a las ocho horas y veinticinco minutos del día veintinueve de abril de dos mil diez.



**LIC. MIGUEL ÁNGEL CEDILLOS ARÉVALO**

**Secretario**

**Sala de lo Contencioso Administrativo**



# FULL TRANSLATION

**309-2006**

**THE UNDERSIGNED CLERK OF THE ADMINISTRATIVE LITIGATION CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE CERTIFIES** that, in the administrative proceeding filed by Mr. Luis Alfonso Valle Deras as attorney for **COMMERCE GROUP CORP. against the MINISTER OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES**, there is a final decision, which **SAYS**, verbatim:

ADMINISTRATIVE LITIGATION CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE: San Salvador, at 11:00 a.m. on the eighteenth of March, two thousand ten.

This action was filed by Commerce Group Corporation through its attorney, Mr. Luis Alfonso Valle Deras, challenging as illegal:

Resolution MARN 3249-779-2006 dated the fifth of July, two thousand six, notice of which was served on the thirteenth of September, of the same year, revoking MARN Resolution No. 474-2002 dated the fifteenth of October, two thousand two. MARN Resolution No. 474-2002 granted an environmental permit to Commerce Group Corporation to carry out the project for the Commerce Group Corporation San Cristóbal Plant.

The following participated in the proceeding: plaintiff as described above, the Minister of Environment and Natural Resources as defendant, and Oscar Jerónimo Ventura Blanco, as delegate and representative of the Attorney General of the Republic.

**I. REASONS**

**A. FACTUAL BACKGROUND**

**THE PARTIES' SUBMISSIONS**

[stamp:] MINISTRY OF ENVIRONMENT AND  
NATURAL RESOURCES  
Apr. 29, 2010  
No. 2956 TIME: 2:58  
RECEIVED BY: [initials]

**1. COMPLAINT.**

*a) Authority sued and challenged act:*

Commerce Group Corp. is filing suit against the Minister of Environment and Natural Resources because it believes that the act described in the introduction of this decision is illegal.

*b) Circumstances:*

Plaintiff asserts that the Minister of Environment and Natural Resources revoked MARN environmental permit No. 474-2002 without following the corresponding guidelines and legal principles pursuant to article 12 of the Constitution and articles 88 and 93 of the Environmental Law.

Plaintiff asserts that on the third of November, two thousand five, it submitted a written request to the Environmental Administration for an environmental audit in order to submit a new bond, as provided for in the environmental legislation (Article 35 of the Regulations of the Environmental Law). Plaintiff goes on to state that upon not having received a response from the defendant, it once again submitted a



new written request on the thirty-first of May, two thousand six, for the environmental audit to be performed.

According to plaintiff, the environmental audit was carried out on the twenty-third of June, two thousand six, eight months following the submission of the first request, and also the audit was performed without taking into consideration the relevant legal guidelines.

Plaintiff states that on the fourth of September, two thousand six, it made a new request to submit a bond, and that it mentioned in that request that operations had not begun; however, the respective environmental measures had been taken to protect the environment.

According to the contents of the complaint, on the thirteenth of September, two thousand six, the company received the administrative act dated the fifth of July, two thousand six which resolved to: Revoke environmental permit 474-2002.

Plaintiff asserts that this resolution lacks a clear legal basis, given that revocation can only occur when the circumstances established in article 64 of the Environmental Law are present, which could not have happened, since, as explained, the company was not in operation, as evidenced by the auditor's findings in the act. In addition, plaintiff considers that in the audit they did not find the environmental harm that allegedly occurred, imposing sanctions in violation of the principle of innocence. For these reasons, the company bringing suit maintains that the findings of the environmental authority, on which it based its recommendation to revoke the permit, could not have existed.

Commerce Group Corporation considers that the sanction imposed did not follow the sanctions procedure as stipulated by the Environmental Law, therefore violating the principles of due process and its right to a hearing. Plaintiff observes that the resolution ordered closure of the company's operations, an authority that lies only with the Ministry of Economy, and therefore that the defendant acted in excess of its authority.

*c) Legal arguments of the claim*

Plaintiff's claim is based on the grounds that the administrative act which is the object of the litigation failed to comply with the guarantees of due process and the principle of legality, since the Administration did not comply with the sanctions procedure by not respecting plaintiff's right to a hearing, and acted in excess of its authority when it revoked the environmental permit, and, in addition, plaintiff observes that said act is not contemplated as a sanction under the environmental legislation.

[initials]

With regard to the order to close the company's operations, plaintiff asserts that the Environmental Authority acted in excess of its authority.

*d. Request*

Plaintiff requests that the challenged act be declared illegal.

## **2. ADMISSION OF THE COMPLAINT.**

Commerce Group Corp. was considered a party, through its attorney, Mr. Luis Alfonso Valle Deras. In the complaint, plaintiff requested suspension of the administrative act; however, because within Salvadoran society there is widespread interest in protecting the environment, that request was rejected. Thereafter, a report was requested from the defendant regarding the existence of the challenged act.

In answering this report, the defendant asserted that the facts put forth by the plaintiff in the complaint were not true. The Minister of Environment and Natural Resources was considered a party; the administrative file was received; the report mentioned in art. 24 of the Administrative Jurisdiction Law was requested, and it was ordered that the Attorney General of the Republic be notified of this proceeding's existence.

## **3. DEFENDANT'S REPORT.**

The Minister of Environment and Natural Resources submitted the 15-day report late, for which it was given a chance to be heard and, since it did not justify its lateness it was fined as indicated in the case file at 10:20 a.m. on the eighth of May, two thousand eight.

## **4. EVIDENTIARY PERIOD.**

Oscar Jerónimo Ventura Blanco participated as adjunct agent delegated by the Attorney General of the Republic, and the evidentiary period was opened pursuant to law. During this period both Commerce Group Corp., through its attorney, and the Ministry of Environment and Natural Resources, submitted briefs, and the Ministry of Environment also submitted a certified copy of MARN environmental permit No. 474/2002.

## **5. NOTIFICATION.**

Notification was carried out as provided for by article 28 of the Administrative Jurisdiction Law.



Regarding the allegations presented, the results were as follows:

a) Plaintiff repeated what was already mentioned in the complaint, reiterating the non-operational status of the project, as recorded in the audit report, that the delay in justice involving its requests, which were submitted to the Ministry in a timely manner, was unwarranted, and that the sanctions procedure was not followed.

Along with its submission, plaintiff attaches a certificate issued by the Subdirector of Hydrocarbons of the Ministry of Economy.

b) The defendant presented its arguments within the proper time period, stating: That MARN environmental permit No. 474/2002 for Commerce Group Corporation's San Cristóbal Plant, had to strictly comply with the environmental measures subject to such guarantees as those provided for by the Environmental Management Program contained in the Environmental Assessment. It also explains that an environmental audit is the mechanism for evaluation and verification of compliance with the environmental measures established in the permit, and also specifies and defines the obligations that the holder must carry out with relation to the environmental permit, considering elements that were not present at the time of the environmental assessment, as well as others that the holder might intend to incorporate into the project.

The Minister of Environment and Natural Resources stated that apart from the task of monitoring through environmental audits, the project's conditions were also monitored through evaluations carried out by the General Bureau of Environmental Management, pursuant to the provisions of the Technical Report on non-compliance with Environmental Measures, dated the twenty-ninth of June, two thousand six. Additionally, the Minister states that MARN resolution No. 3249-779-2006, specifically part X, is based on the principle of precaution or Appropriate Avoidance.

c) The representative of the Attorney General of the Republic considers that the resolution issued by the defendant, MARN No. 3249-779-2006, was issued in accordance with the Environmental Law and its respective Regulations, and was motivated by the precautionary principle, the audits carried out on the twenty-third of June, two thousand six, and the technical report on non-compliance with environmental measures issued by the General Bureau of Environmental Management of the Ministry of Environment and Natural Resources, both of which determined that environmental measures 4, 5, and 6 as established by MARN environmental permit 474-2002 were not complied with.

## **B. LEGAL GROUNDS.**

[initials]

## **1. OBJECT AND LIMITS OF THE CLAIM.**

In accordance with art. 32 of the Administrative Jurisdiction Law, the decision in this dispute shall be based only on the disputed points in relation to the challenged administrative act.

From what is established in the complaint, Commerce Group Corporation is seeking a declaration of illegality of:

MARN Resolution 3249-779-2006 dated the fifth of July, two thousand six, notice of which was served on September thirteenth, two thousand six. This resolution revoked MARN Resolution No. 474-2002 dated the fifteenth of October, two thousand two. MARN Resolution No. 474-2002 granted an environmental permit to Commerce Group Corporation to carry out the Commerce Group Corporation San Cristóbal Plant project, which consisted of operations to obtain gold from gold-bearing material originating from the San Sebastián Mine, a project located in the community of Loma Larga, 3 kilometers northeast of El Divisadero, in the Department of Morazán.

The reasons put forward by plaintiff are the assertion that the administrative act which revoked MARN environmental permit No. 474-2002 was issued without adhering to the sanctions procedure established by the Environmental Law; stemming from that, the violation of the presumption of innocence; right to a hearing; and that at the same time the Ministry of Environment and Natural Resources, through said act, acted in excess of its authority in ordering the project's closure.

## **2. ADMINISTRATIVE AUTHORITY ACTIONS.**

The environmental administrative authority issued an administrative act because it believed that Commerce Group Corporation's omission was a circumstance of the type established by article 64 of the Environmental Law; based on that, the administrative file was reviewed, which indicates that the facts developed as follows:

a) On the fifteenth of October, two thousand two, the Minister of Environment and Natural Resources issued an environmental permit, MARN Resolution No. 474-2002, to Commerce Group Corporation as owner of the Commerce Group Corporation San Cristóbal Plant project, which consisted of operations to obtain gold from gold-bearing material originating from the San Sebastián Mine, a project located in the community of Loma Larga, 3 kilometers northeast of El Divisadero, in the Department of Morazán.

The bond presented by the project owner to obtain the permit was for a three-year period.

b) At one o'clock on the twenty-third of June, two thousand six, an environmental audit was carried out at the site where the Commerce Group Corporation project is being developed, found at pages 17 and 18 of the record of this proceeding, and pages 25 and 26 of the administrative file.

c) On the twenty-seventh of June, two thousand six, the auditor responsible for the environmental audit issued a report on the environmental audit that was performed, which is located at pages 15 and 16 of the record of this proceeding, and pages 24 and 25 of the administrative file.

d) On the twenty-ninth of June, two thousand six, the General Bureau of Environmental Management issued a technical report concerning the audit performed on the twenty-third of June, two thousand six, which is found at pages 10 to 14 of the record of this proceeding, and pages 28 to 33 of the administrative file.

e) On the fifth of July, two thousand six, the environmental authority issued an administrative act which revokes MARN resolution No. 474-2002, orders the plaintiff to submit the plan for termination of operations, releases the bond for environmental compliance, and orders that the obligations set out in number 2 be complied with.

### **3. ANALYSIS OF THE CASE.**

As established at the proper time, Commerce Group Corporation submitted as documentary evidence the certificates, acts, and reports at pages seven to thirty-three, which they attached to the complaint, and a copy of certification issued on the thirtieth of January, two thousand eight by the Subdirector of Hydrocarbons under the terms established in the explanation issued by the Clerk of this Court.

The Minister of Environment and Natural Resources submitted as evidence certification of Environmental Permit 474-2002 and, as formal evidence of the administrative act, submitted the administrative file.

Both submissions shall be analyzed under article 265 of the Code of Civil Procedure, which considers a document to be recognized when it is submitted in and associated with the proceeding and its legitimacy is not countered. Neither plaintiff nor defendant repudiated the evidence submitted within the proper timeframe. Consequently, the assessment of each shall be taken into consideration to determine whether the grounds alleged by plaintiff warrant that the act be declared illegal.

As the first point of analysis, this Court considers it appropriate to assess the concept of revocation of permits and the sanctions procedure, in order to determine if this concept was applied correctly.

[initials]



**a) Due process with regard to sanctions and revocation of permits:**

Commerce Group Corp. states in the complaint: *"Given this situation, the constitutional principles of entitlement to a hearing and to due process are considered to have been violated, since a resolution was issued without any formalities or proceedings regarding the disputed facts and legal issues, much less mentioning my client's principal arguments, showing that at no time was it granted its right to a hearing, which is even established in Art. 93 d) of the Environmental Law itself"*.

In determining whether due process was carried out, this Court considers it necessary to examine, as a first step, which process should have been applied, then to confirm whether that process was violated. To do so it is important, first, to determine the nature of the concept of Revocation as prescribed by our environmental legislation.

To revoke is: *"To nullify a declaration of intention or a legal act that unilaterally has legal authority...or others that may be admitted by law or agreed by the parties"* (Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales [Scientific, Legal, Political, and Social Dictionary]; Ossoio, Manuel). As plaintiff observes in its own complaint, the Environmental Law regulates the Administrative Sanctions Procedure in Title XIII, Chapter 1, which does not contemplate the concept of revocation as a sanction, for the simple fact that it is not a true sanction, but could, at most, be the consequence of a sanction.

Revocation of a legally-granted environmental permit is the result of violation of its conditions or requirements. In other words, it the holder's failure to observe the conditions and requirements which make the permit valid, that results in its nullification. Revocation *"results precisely because those conditions have changed, voluntarily by the individual, as a result of non-compliance with what the same requires"* (Fortes Martín, Antonio: *"Estudio sobre la Revocación de los Actos Administrativos"* [Study of Revocation of Administrative Acts], *Revista de Derecho*, Valdivia, Vol. XIX No. 1, July 2006, pp. 149–177).

The authority to revoke a permit stems from the well-known trilogy of Public Administration: police power, public service or provision of services, and public works or development. Police power is what creates the legal authorizing authority within the Administration to control and oversee all private activities within the criteria and framework of the law. This power authorizes the Administration, among other things, to grant permits, licenses, or certificates;

but it also allows the Administration to annul or revoke these, provided it is done within the parameters established by the law itself.

With regard to authorizations, in decision 65-H-98, from 2:14pm on the thirty-first of August, nineteen ninety-nine, this Court ruled: *"First, it should be taken into account that the authorizing function represents a type of legal limitation on individuals, in the sense that the legislator prohibits them from exercising certain activities, that can only be carried out, subject to the intervention of the Public Administration, which is aimed at ascertaining compliance of the conditions provided for by law, to that effect. Suffice it to say that the legislator, through this function, seeks an end result of a public nature: he relies on this function to protect certain collective interests based on the nature of the activities in question.*

*This is also so with the legal authority to grant authorizations. Inherent in this is the possibility that the Public Administration may impede the exercise of regulated activities, where proper authorization does not exist, and generally where these activities are conducted outside of the guidelines defined by law. Otherwise, the aim sought by the rule implementing these authorizations in both cases would not be met."*

Otto Mayer, in his work entitled "German Administrative Law"; Volume II, explains that revocation is not available in the following cases: a) when something has been granted by a decision that has acquired *res judicata* and b) when it is prohibited by law. According to the German author, this occurs especially when the law provides for special circumstances in which revocation is authorized. In these cases the law limits the discretionary power of the Administration and circumscribes its will based on what the law has established.

Article 64 of the Environmental Law limits the will of the Minister of Environment and Natural Resources to only two arguments: a) The refusal of the environmental permit holder to comply with the conditions established by the permit, and b) the violation of the technical norms regarding environmental quality and rational and sustainable use of resources. This means that the Minister could only revoke a legally-granted environmental permit if the project owner fits into one of these categories.

With respect to the foregoing, it is evident that the environmental legislation does not contemplate revocation as a sanction for the simple fact that it is a consequence of the policing authority of the Ministry of Environment and Natural Resources to protect, oversee, and control the environment.

[initials]

Therefore, the sanctions procedure regulated subject to the environmental legislation was not applicable in the case in question.

#### **b) Guaranteed right to defense and the right to a hearing**

With respect to the objective of revocation, the idea addressed by authors such as Sala Arquer, determine that its objective is withdrawal from the Legal System of an existing administrative act because it is considered harmful to the public interest (*See* Sala Arquer, J.M.: "*La Revocación de los Actos Administrativos en el Derecho Español*" ["Revocation of Administrative Acts in Spanish Law"]; pp. 183 and 184.); the intent of revocation is to protect the common good, in the case at hand, the common good of the environment.

However, due to the effect of the revocation, the Law needs to ensure that the Administration's power to revoke does not result in excesses that threaten the individual's legal certainty and thus does not destroy confidence in the Salvadoran legal system. As such, the Constitution recognizes the application of due process when there is danger of harming an individual's legal rights.

Among the principles that protect due process is the principle of equality of the parties to the proceeding, which guarantees bilateralness and adversary procedure in litigation, that is, guarantees that the process will be carried out, under the judge's control, between the two parties, with the same conditions for being heard, so the arguments of both parties can be heard and addressed (Véscovi, Enrique: "*Teoría General del Proceso*" [General Theory of Proceedings]; page 54, number 4).

Although it establishes the reasons why the Minister of Environment and Natural Resources may revoke a permit (article 64 of the Environmental Law), the Environmental Law of El Salvador does not establish the legal process that must be applied; however, any act of an authority must be in the light of the Law and the Constitution: the Minister of Environment and Natural Resources must and shall apply the minimum principles of due process. The administrative process must include as minimum guarantees: due communication of the facts under investigation; a reasonable time period for the affected party to defend itself; an evidentiary period during which the submissions are conveyed to the opposing party; equal opportunity to set forth their arguments.

In analyzing MARN administrative act 3249-779-2006 challenged by plaintiff, it is noted that the Environmental Authority revoked the permit due to plaintiff's failure to comply: a) with the environmental measures established in the Environmental Improvement Program; b) with the Environmental Monitoring Program; and



c) the mandatory environmental measures, all of which are addressed in the permit.

According to the certificate of the twenty-third of June, two thousand six, the environmental assessment audit was carried out using the procedure, previously described, established in the Regulations of the Environmental Law (initial meeting, verification of compliance and follow-up of the environmental measures proposed in the environmental permit, and the final meeting with the audited party). At the initial meeting, the objective of the resolution was explained; once the audit was concluded, the audited party was advised of its findings, made known to it through the engineer representing the project. A certificate was drawn up, a record was made of its delivery to the representative, and it provided notice of a period of eight business days in which the holder could submit documentation and make clarifications, thus allowing it to challenge the auditor's opinion.

Article 37 of the Regulations of the Environmental Law contemplates the drafting of a technical non-compliance report as part of the environmental audit procedure. In this Report, it was determined that the measures established in MARN permit 474-2002 had not been executed, and as such, its revocation was recommended, as established pursuant to Roman Numeral IV in the permit.

The environmental audit certificate was the means by which the administrative authority communicated the facts investigated; the communication made in the certificate to contradict the findings and the eight-day period for submission of evidence guaranteed plaintiff's right to defense.

Within this period of eight business days that was communicated to it, plaintiff did not make use of its right to defense during the appropriate time period, as evidenced by the written submission by plaintiff on the fourth of September, two thousand six (attached at pages 25 to 32 of the record of this proceeding, and pages 85 and 88 of the administrative file), two months after the administrative act it is challenging was issued.

Having established the foregoing, it is proven that the guarantees of due process for Commerce Group Corp. were respected.

**c) Excess of authority: Non-compliance with the principle of legality**

[initials]

Regarding the plan for closure of operations and rehabilitation: said plan is part of the environmental management program (Article 24 of the Regulations of the Environmental Law) which also includes the environmental impact study.

Article 21 of the Environmental Law establishes that any activity, construction or project that may have considerable or irreversible impact on the health and wellbeing of people or the ecosystem, requires, by mandate of law, an environmental impact study. Mining activities are present in this list.

According to the Environmental Law, the environmental permit requires the holder to take all the actions for prevention, mitigation, or compensation established in the Environmental Management Program (Article 20 of the Environmental Law). This Program is the result of the environmental principles recognized in our legislation: the principle of prevention, of precaution (article 2 e) of the Environmental Law), and the polluter-pays principle (article 85 of the Environmental Law). The plan for closure and [*sic*] operations is found within the Environmental Management Program.

According to the Environmental Law, the environmental permit requires the holder to take all the actions for prevention, mitigation, or compensation established in the Environmental Management Program (Article 20 of the Environmental Law). As such, in revoking the permit based on failure to comply with the requirements that allow the permit to exist, the plan for closure and [*sic*] operations is part of the process of rehabilitation and compensation that results from mining activity.

The Minister of Environment and Natural Resources complied with the principles of due process prior to revoking MARN environmental permit No. 474-2002, respecting the right of the affected party to a hearing and defense. In turn, the defendant, in compliance with the principle of legality, was right to request the plan for closure of operations and rehabilitation, as required by the Environmental Law.

Therefore, this Court holds that MARN administrative act 3249-779-2006, issued on the fifth of July, two thousand six by the Minister of Environment and Natural Resources, is a legal act.

## **II. RULING**

CONSEQUENTLY, based on the foregoing and article 64 a) of the Environmental Law, articles 421 and 427 of the Code of Civil Procedure, articles 31, 32, and 53 of the Administrative Jurisdiction Law, in the name of the Republic, this Court **DECIDES:**

a) To declare legal MARN act No. 3249-779-2006 issued by the Minister of Environment and Natural Resources on the fifth of July, two thousand six.

b) To order Commerce Group Corporation to pay court costs in accordance with the law.

c) In the notification, to order that certification of this ruling be provided to the parties and the Office of the Attorney General.

d) To order that, at the proper time, the administrative file be returned to its office of origin.

Let notice be issued: **Amended: fifteen-Valid.**

"M. POSADA" "L.C. DE AYALA G." "M.A. CARDOZA A." "E.R. NÚÑEZ."

HANDED DOWN BY THE UNDERSIGNED JUDGES. "ILLEGIBLE." CLERK.

**THIS MATCHES ITS ORIGINAL**, to which it was compared, and for delivery to the **MINISTER OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES**, this **CERTIFICATION** is issued, signed and sealed, on six pages of text, in the office of the Clerk of the Administrative Litigation Chamber of the Supreme Court of Justice; San Salvador, 8:25 a.m. on the twenty-ninth of April, two thousand ten.

[seal:]  
Clerk, Administrative Litigation Chamber  
Supreme Court of Justice  
Republic of El Salvador, San Salvador  
[emblem] [initials]

[signature]  
**MIGUEL ÁNGEL CEDILLOS ARÉVALO**  
**Clerk**  
**Administrative Litigation Chamber**